

Voces: RESPONSABILIDAD BANCARIA - CONTRATOS BANCARIOS - CUENTA CORRIENTE BANCARIA - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS - OBLIGACIONES DE NO HACER - MANDATO - ESCRITURA PÚBLICA - INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO - ELEMENTOS PROBATORIOS - PRUEBA DOCUMENTAL - LEY SOBRE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y CHEQUES - PRESCRIPCIÓN - RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO - INALTERABILIDAD DE LOS HECHOS DE LA INSTANCIA - RECHAZO DEL RECURSO - DISIDENCIA

Partes: Coexpan Chile S.A. c/ Banco Security | Indemnización de perjuicios - Recurso de casación en el fondo

Tribunal: Corte Suprema

Fecha: 23-mar-2009

Cita: MJCH_MJJ19726 | ROL:7104-07

Producto: MJ

Doctrina:

1.- Habiendo quedado establecido como hecho de la causa que el banco demandado cargó en la cuenta corriente que la actora mantenía en el banco demandado sumas de dinero en pesos, para luego adquirir una cantidad de dólares, al cursar una solicitud hecha por quien carecía de poder suficiente para efectuarla, es indudable que incurrió en incumplimiento de una obligación negativa, esto es, de no hacer, incumplimiento que de acuerdo con lo que establece el artículo 1555 del Código Civil en su inciso primero, se resuelve en la obligación de indemnizar los perjuicios, si no pudiese deshacerse lo hecho. Esto es, precisamente, lo reclamado derechamente por la sociedad demandante como acción substitutiva y compensatoria que resulta ser, en este caso, hasta el punto que el acreedor quede indemne, es decir, libre de daño.

2.- En lo referido a la alegación del banco demandado -que la actuación de uno sólo de sus directores se ajustó al modo habitual de operar entre las partes- es relevante consignar que dicha acción no se acreditó como un hecho respecto de comprar en moneda extranjera para depositar en cuentas de terceros, ya que no se realizó de acuerdo a lo convenido por escritura pública, por lo que el banco incurrió en una conducta descuidada o negligente en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, lo que generó un perjuicio a la demandante. En efecto, aún cuando se hubiere acreditado aquella circunstancia, no puede la entidad bancaria demandada invocarla como causal modificatoria de su responsabilidad contractual, desde que el titular de la cuenta corriente es una persona jurídica que tiene una forma de representación distinta y en la cual participan distintas personas en su representación, cada una con facultades que le son propias y restringidas a lo que efectivamente se les ha conferido; siendo de advertir que los poderes para actuar conjuntamente ante el banco demandado fueron conferidos por escritura pública y el hecho que en las anteriores operaciones hubiere actuado uno sólo de los autorizados no implica sino que, también en ellas, hubo al menos un descuido que no puede

obligar al demandante, por no encontrarse conferidos los poderes para actuar en su representación de esa forma.

3.- El contrato de cuenta corriente bancaria es bilateral por lo que debe sujetarse al artículo 1489 del Código Civil -precepto que establece la condición resolutoria tácita para los contratos bilaterales- y si no aparece que dicho contrato se encuentre terminado y se alega su incumplimiento debe pedirse al juez que declare, o bien el cumplimiento forzado de la obligación, o la resolución o terminación del contrato, dependiendo de su naturaleza, y sólo como consecuencia de una u otra, la indemnización de perjuicios.

4.- La ejecución de una orden de pago emanada del comitente constituye una obligación tan esencial del contrato de cuenta corriente bancaria que se encuentra en la definición del artículo 1º de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.

5.- En materia de prescripción para la acción es aplicable al caso el plazo de cuatro años previsto como regla general para las obligaciones mercantiles; ello por cuanto en la especie se trata de determinar si la entidad demandada, al extraer dinero de la cuenta corriente de la sociedad demandante para comprar dólares y remesarlos a una cuenta en el extranjero, actuó o no conforme a los poderes otorgados por el cuentacorrentista y debidamente registrados en el Banco para dar cumplimiento a la orden de compra recibida. En cambio, no resulta aplicable el plazo de prescripción especial de dos años, establecido por los artículos 4 y 5 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, que rige para impugnar cualquier vicio en el manejo de una cuenta corriente que se advirtiere mediante la verificación de los saldos reflejados en los estados periódicos que los bancos envían a los titulares de las mismas, comúnmente denominados «cartolas». Por ello, es improcedente la aplicación de normativa especial establecida por el legislador con fines que dicen relación con la corrección meramente contable de los saldos de cuentas corrientes bancarias.

6.- Si los planteamientos del recurrente están condicionados a que se acepte su manera de entender e interpretar las estipulaciones contractuales, ello es materia ajena al control de la Corte, puesto que importaría exigir un nuevo análisis sobre la forma de ejecutar el contrato y la prueba rendida al respecto para establecer que la ejecución práctica del mismo -conformada por las órdenes, solicitudes y operaciones realizadas por uno sólo de los directores de la sociedad actora, sin la concurrencia de la firma de cualquiera de las otras personas autorizadas para ello- vino a sustituir las cláusulas sobre poderes establecidas en escritura pública. En este orden, la voluntad e intención de los contratantes constituye un hecho de la causa, dado que los jueces del fondo lo establecen como fruto de la valoración de las probanzas rendidas y, por ende no es susceptible de alterarse o ser revisado por la vía del recurso de casación en el fondo y debe mantenerse inamovible mientras no haya vulneración de las normas reguladoras de la interpretación de los contratos en su verdadero sentido y alcance.

7.- Queda, indudablemente, dentro de la competencia de la Corte de Casación la revisión de la calificación jurídica de los hechos, la determinación del carácter legal de los mismos, como de las disposiciones legales aplicables y los efectos que de tales normas derivan para el caso concreto. Ello por cuanto lo que le corresponde ver es si, establecido un hecho cualquiera, éste reúne los caracteres o requisitos fijados por la ley para que produzca un efecto determinado, y ver si las consecuencias jurídicas que los jueces sentenciadores han sacado de los hechos constatados soberanamente, están ajustadas a derecho, o por el contrario si se han negado a admitir las consecuencias que de ellos se deducen (Del voto en disidencia del Ministro Sr. Muñoz Gajardo).

8.- La discusión surge a partir de la aplicación práctica que según el demandando, las partes dieron al contrato, conforme al cual durante años los ejecutivos de la demandante llevaron las relaciones comerciales con el banco, procediendo a girar el primero de los nombrados números cheques de manera individual, sin que la sociedad demandante impugnara dichas actuaciones. En este sentido, es

preciso considerar las orientaciones que entrega el legislador especialmente en los artículos 1560 a 1566 del Código Civil, de las que se puede observar su intención de distinguir entre las que se extraen del contrato mismo y aquellas que se desprenden de las circunstancias de la especie o que reflejan un comportamiento de las partes, conforme a lo que estimaron fue el acto o contrato celebrado. (Del voto en disidencia del Ministro Sr. Muñoz Gajardo).

9.- Toda vez que en la especie la demandada acompañó abundante documentación probatoria en tal sentido, indubitadamente se puede concluir que hubo una ratificación tácita y confirmación del actuar del funcionario del banco por parte del actor, desde que nunca objetaron las actuaciones de dicho personero. Y, en tal virtud, corresponde estimar que los jueces del fondo infringieron los artículos 1545 y 1564 del Código Civil, pues se prescindió de considerar la aplicación que las partes dieron al contrato durante años, incurriéndose de este modo en infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo; por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación en el fondo y dictar sentencia de reemplazo. (Del voto en disidencia del Ministro Sr. Muñoz Gajardo).

Santiago, 23 de marzo de 2009.-

Vistos:

En estos autos Rol N° 3184-2004 del Vigésimo Primer Juzgado Civil de Santiago sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios, caratulados "Coexpan Chile S.A. con Banco Security", don Enrique Vicuña Videla en representación de la Sociedad Comercial e Industrial Coexpan Chile deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra del Banco Security a fin se declare que el banco demandado infringió el contrato de cuenta corriente bancaria al egresar de la cuenta N° E-0009741-01, de la cual era titular la sociedad demandante, la cantidad de \$ 170.618.991 para destinarla a adquirir moneda extranjera y enviarla a una cuenta ajena, aceptando para ello negligentemente una orden inválida y disponiendo que por dicha infracción debe indemnizar los perjuicios causados a la demandante, que alcanzan a dicho monto más los intereses legales que se han devengado desde el incumplimiento contractual, ocurrido el 22 de febrero de 2001, o el monto que se estime ajustado a derecho, con costas.

Por sentencia de veintisiete de abril de dos mil siete, escrita a fojas 350, la jueza titular del referido tribunal acogió la demanda y condenó al demandado a pagar a la demandante a título de indemnización de perjuicios la suma de \$ 170.618.991 , más intereses a contar de la fecha de la notificación de la sentencia y las costas del juicio.

En contra de dicho fallo la demandada dedujo recurso de apelación, adhiriendo el actor a dicho recurso y una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante sentencia de diecinueve de octubre de dos mil siete, que se lee a fojas 433, lo confirmó.

En contra de esta última decisión el demandado ha deducido recurso de casación en el fondo.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que en el primer capítulo del recurso de casación en el fondo se denuncia infringido el artículo 1489 del Código Civil, sosteniendo que en materia de responsabilidad contractual, la demanda de indemnización de perjuicios sólo puede formularse a consecuencia de haberse pedido como declaración principal la resolución o el cumplimiento forzado de una obligación, no procediendo pedirla aisladamente como se hizo.

Refiere el recurrente que de la lectura de la demanda y del fallo, se desprende que el presente juicio es de responsabilidad contractual y, en tal virtud deben aplicarse todas las normas contenidas en el Código Civil relativas al incumplimiento contractual.

En la especie, al contrario de lo que dice la sentencia, es aplicable el artículo 1489 del Código Civil, por cuanto de acuerdo a dicho precepto en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Luego, el contrato de cuenta corriente bancaria es bilateral por lo que debe sujetarse a esa norma, máxime si no aparece que dicho contrato se encuentre terminado.

Añade que la condición resolutoria tácita opera en los contratos, respecto de las obligaciones esenciales o principales del mismo, pues respecto de las accesorias sólo puede operar la condición resolutoria ordinaria pactada de manera expresa en él.

Indica que el supuesto incumplimiento en la ejecución de una orden de pago emanada del comitente, se encontraría enmarcada precisamente en una obligación tan esencial que se encuentra en la definición del artículo 1° de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.

Concluye que si un contrato cuya existencia se ha probado- considerando 20°- más no así su terminación y se alega el incumplimiento debe pedirse al juez que declare o bien el cumplimiento forzado de la obligación, o la resolución o terminación del contrato, dependiendo de su naturaleza y sólo como consecuencia de una u otra, la indemnización de perjuicios. En el segundo capítulo del recurso se alega la contravención de los artículos 4 y 5 del DFL 707 de 1982, Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y cheques. Explica el recurrente que su parte alegó al contestar la demanda, expresó que la acción de la sociedad demandante se encontraba prescrita en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la citada ley; y en subsidio que había caducado el derecho del demandado, por cuanto la ley establece un plazo de 30 días para ejercer los reclamos respecto de los posibles vicios contenidos en los informes que el banco presta al comitente.

Indica que en el considerando vigésimo octavo los jueces dan por establecido el transcurso del plazo, pero le dan un significado distinto prescindiendo de las normas sobre la prescripción.

El recurrente sostiene que los artículos 4° y 5° del DFL 707, establecen el procedimiento por el cual todo banco debe cumplir su obligación de comunicar, es decir, de rendir informe del saldo de una cuenta corriente, a su comitente y la obligación de este de reconocer dichos informes.

La práctica bancaria ha hecho, dice, que aquella obligación se cumpla a través de las cartolas de los movimientos que registran las cuentas corrientes y al cabo de 30 días en que el correo certifique la carta que contenga los saldos, caduca el plazo para objetar o reclamar frente al banco por el saldo reflejado.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 4° del mismo estatuto jurídico deja a salvo el derecho del cliente para requerir la rectificación de los errores, omisiones, partidas duplicadas, la determinación judicial de los saldos u otros vicios por la vía del juicio sumario y a través de los informes de peritos contables. En este caso tiene un plazo de prescripción dos años para impugnar y hacer determinar por vía judicial dicho saldo, el que se cuenta desde el balance. Manifiesta que la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques contiene un plazo especial de prescripción de dos años para la impugnación de todo cargo que se efectúe en el contrato de cuenta corriente bancaria- que es precisamente el contrato respecto del cual se alega su incumplimiento- modificando la regla general en materia de obligaciones mercantiles, cuyo plazo es de cuatro años.

En el caso de autos, refiere, se encuentra establecido que el 22 de febrero de 2001, el banco realizó un

cargo en la cuenta corriente de su comitente Coexpan Chile S.A, abono que no fue impugnado o reclamado por el actor, no obstante estar informado con la cartola enviada el 22 de febrero de 2001, por lo que la acción para determinar judicialmente el saldo prescribió el 22 de febrero de 2003, y la demanda se presentó el 18 de mayo de 2004.

Expresa, finalmente que el fallo incurre en una contravención formal de las normas descritas, por cuanto prescinde de la aplicación de las mismas que imponen las obligaciones respectivas a cada parte del contrato de cuenta corriente bancaria estableciendo un plazo especial de prescripción, de dos años para impugnar cualquier vicio existente en el manejo de una cuenta corriente.

En el tercer capítulo se denuncia la vulneración del artículo 1545 en relación al 1564 del Código Civil. Sobre dicho punto, señala el recurrente que su parte alegó durante el juicio, que figurando el contrato supuestamente infringido en formulario tipo y que contenía solo cláusulas generales, para determinar si se estaba en presencia de incumplimiento debía interpretarse el contrato según la aplicación práctica que las partes hayan hecho del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1564 inciso 3° del Código Civil. Sin embargo el fallo en el considerando 23° establece, respecto de tal regla de interpretación que su parte "no puede invocarla como causal modificatoria de su responsabilidad contractual" y es en esa aseveración donde se produce el error de derecho.

Lo que ocurrió es que el contrato de cuenta corriente fue suscrito por el señor Gregorio Guzmán Cordero en nombre y representación de Coexpan Chile S.A el 21 de agosto de 1984, en aquél entonces la estructura de poderes de dicha sociedad establecía que para operaciones bancarias debían actuar el señor Guzmán en conjunto con cualquiera de otros dos directores, más en la celebración del contrato compareció el mencionado señor Guzmán en forma individual.

A juicio del recurrente, la suscripción del contrato de cuenta corriente, inicialmente en infracción a los poderes de la sociedad, fue ratificada por Coexpan Chile, la que en lo sucesivo comenzó a operar con esa cuenta corriente. Se sostiene que situaciones como aquella sucedieron permanentemente en el marco de la relación bancaria entre el banco y la sociedad demandante, como se acreditó en autos con las copias de los cheques girados por el señor Guzmán, cuando supuestamente debían ser girados por él en conjunto con otras personas.

De este modo, expresa el demandado, el fallo impugnado desconoce esta aplicación práctica que del contrato hicieron las partes, configurándose así la infracción al artículo 1564 del Código Civil que establece que los contratos se interpretaran por la aplicación práctica dada al mismo y de esta manera se contraviene el artículo 1545 del Código Civil. En un cuarto capítulo de la casación en el fondo se censura al fallo haber infringido los artículos 31 y 41 de la ley 18046, toda vez, que los poderes otorgados con fecha 28 de enero de 1988 y complementados el 13 de junio del mismo año, como los de fecha 22 de diciembre de 1999, contenían igual estructura de actuación, es decir, la participación conjunta del señor Guzmán con otro de los nombrados en cada instrumento.

Sin embargo, ambas partes hicieron caso omiso de tal estructura de representación y permitieron permanentemente la actuación individual del señor Guzmán ante el banco. Añade que dicha institución actuó obedeciendo las instrucciones impartidas individualmente por el señor Guzmán y Coexpan Chile S.A., lo hizo validando permanentemente tales actos, expresa o tácitamente, sin reclamar de ello, lo que se encuentra acreditado con cheques aparejados en autos y girados a nombre de Coexpan Chile, por el señor Guzmán de manera individual entre el 2 de noviembre de 1999 y el 28 de diciembre de 2001, cuyo giro no fue objetado por actor y por las copias de las cartolas enviadas a la sociedad demandante, lo que significó una ratificación tácita del actuar del citado Guzmán.

Indica que de acuerdo con los artículos 31 y 41 de la ley 18046 la responsabilidad de los actos dolosos, culpables o fraudulentos de Gregorio Guzmán se radica en el directorio de la sociedad demandante,

pues los actos se ejecutaron con su venia.

El quinto capítulo del recurso denuncia vulneradas las normas reguladoras de la prueba.1.- Infracción a los artículos 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil y 1702 del Código Civil, en cuanto el fallo no le atribuye el valor probatorio que legalmente procede a los instrumentos privados consistentes en cartolas bancarias y cheques de la actora, estos últimos dan cuenta de que en numerosas oportunidades el banco dio curso a órdenes de pago, aún cuando solo contaba con la firma del señor Guzmán y la sociedad Coexpan Chile jamás reclamó al banco por haber cumplido dichas órdenes, constituyendo una ratificación tácita del actuar individual del señor Guzmán. Prueban lo anterior las cartolas no objetadas.

Por lo que las cartolas y cheques referidos demuestran fehacientemente que las partes, en la aplicación práctica que le dieron al contrato, le otorgaban al señor Guzmán el carácter de mandatario válido para actuar individualmente frente al banco, como asimismo se probó que el directorio no ejerció la supervigilancia a la que estaba legalmente obligado.

2.- Infracción al artículo 154 Ley General de Bancos en relación con los artículos 19 N° 3 y 5° inciso 2° de la Constitución Política. La sentencia, dice el recurso, no aceptó las declaraciones de los señores Granitti y Oliva por ser empleados del banco en virtud de lo dispuesto en el artículo 358 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, el error de derecho radica en que el juez no reparó en que los hechos ventilados en el proceso se encontraban amparados por el artículo 154 de la citada ley, es decir, la obligación de secreto bancario, por lo que es evidente que sólo podían declarar por su parte como testigos, las personas del banco, pues cualquier declaración de un tercero ajeno al banco hubiese significado la violación del secreto bancario arriesgando responsabilidad civil y penal. Estima que al dejar a su parte desprovista de la declaración de los testigos infringe su derecho a defensa consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, previo al análisis de los argumentos del recurso es menester consignar los siguientes antecedentes del proceso:

a) que don Enrique Vicuña Videla, ingeniero, en representación de la sociedad demandante demandó indemnización de perjuicios al Banco Security señalando, en síntesis, que el 22 de febrero de 2001 el banco demandado extrajo de la cuenta corriente bancaria de la demandante la suma de \$ 170.618.991, la que utilizó el mismo banco en adquirir US\$ 300.000, que en seguida remesó a una cuenta del Banco Citibank de Nueva Cork, señalando como beneficiario de esos fondos a Roberto Eyzaguirre Barahona, accediendo de este modo a una solicitud hecha por Gregorio Guzmán Cordero el que se desempeñaba como gerente de administración y finanzas de la compañía, infringiendo de este modo el contrato de cuenta corriente, puesto que éste último sólo podía efectuar operaciones bancarias, como el giro, órdenes de pago, libramientos u otra forma de disposición de cualquier suma mediante documento suscrito por el mencionado Guzmán Cordero conjuntamente con Roberto Eyzaguirre Barahona o Enrique Videla Vicuña o Luis de Mussy Marchant, tal como se acordó en la 34ª reunión de directorio de Coexpan Chile S.A. celebrada el 25 de noviembre de 1999. Estima el perjuicio en la suma equivalente a la cantidad sustraída, lo que se produjo como consecuencia de la negligencia del demandado, quien acató una orden de giro de fondos dada únicamente por Gregorio Guzmán, en circunstancias que estaba vedado actuar de ese modo. b) la parte demandada se opuso a la acción alegando, en síntesis, que la relación entre las partes surgió a partir de un contrato de cuenta corriente bancaria celebrado con fecha 21 de agosto de 1984, firmado por don Gregorio Guzmán Cordero en representación de Coexpan, diariamente, asevera, la demandada interactuaba con el actor, sociedad que intervenía a través de su gerente de administración y finanzas, Gregorio Guzmán, por lo que la intervención del banco al cumplir las instrucciones que al efecto le impartiera el mencionado gerente, se adscribió a la ejecución y cumplimiento que ambas partes habían concebido desde hace mucho tiempo como válidas. Refiere que la demandante vulnera la teoría de los actos propios, toda vez que los mismos que validaron la actuación de Guzmán, ahora sostienen un incumplimiento contractual

inexistente. En subsidio, de lo anterior alega la exoneración total de responsabilidad por concurrir negligencia manifiesta del actor y la improcedencia de la indemnización de perjuicios al no haber pedido la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios, atento lo dispuesto en el artículo 1489 del Código Civil. También en subsidio, opone la excepción de prescripción del artículo 5° de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, que establece un plazo de dos años para impugnar y hacer determinar por la vía judicial los saldos de su cuenta corriente y en subsidio, esgrime que ha operado la caducidad del derecho del actor a reclamar los cargos en su cuenta corriente, conforme al artículo 4° de la citada ley.

Tercero: Que, corresponde en primer término, determinar la existencia de la infracción de las leyes reguladoras de la prueba que denuncia el recurso, la cual se hace consistir en la transgresión a los artículos 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil y 1.702 del Código Civil; y artículo 154 de la Ley General de Bancos en relación con los artículos 19 N° 3 y 5° inciso segundo de la Constitución Política, preceptos que de haberse aplicado correctamente habrían llevado a los jueces del grado a interpretar el contrato conforme a su aplicación práctica.

Cuarto: Que en primer término debe consignarse, como lo ha reconocido reiteradamente esta Corte, que se entienden vulneradas las normas reguladoras de la prueba, fundamentalmente, cuando los sentenciadores invierten el onus probandi, rechazan las pruebas que la ley admite, aceptan las que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en el proceso cuando la ley le asigna uno determinado de carácter obligatorio o alteran el orden de precedencia que la ley le diere.

Se ha repetido que ellas constituyen normas básicas de juzgamiento, que contienen deberes, limitaciones o prohibiciones a que deben sujetarse los sentenciadores. Luego, los jueces del fondo son soberanos para apreciar las pruebas, dentro del marco establecido por las normas pertinentes. Se ha repetido que ellas constituyen normas básicas de juzgamiento, que contienen deberes, limitaciones o prohibiciones a que deben sujetarse los sentenciadores. Luego, los jueces del fondo son soberanos para apreciar las pruebas, dentro del marco establecido por las normas pertinentes.

Por ello la infracción de ley, en esta materia, sólo es posible basarla respecto de normas que revisten el carácter antes dicho, lo que no alcanza al artículo 346 del Código de Procedimiento Civil invocado por la recurrente, desde que aquel precepto sólo indica pautas procesales para establecer el reconocimiento de los documentos privados presentados al juicio, pero su valoración se encuentra contenida en normas del Código Civil que no son denunciadas como vulneradas. En efecto, se denuncia como infringido el artículo 1702 del Código Civil, cuya eficacia como norma reguladora de la prueba está en relación directa con lo que preceptúa el artículo 1700 de este mismo cuerpo legal, el cual tampoco se señala como vulnerado, de modo que su sola mención no sirve para desvirtuar los hechos de la manera como fueron establecidos por los jueces del fondo. No obstante lo anterior, deberá igualmente ser desestimada la denuncia de trasgresión a la aludida disposición legal, toda vez que del análisis del fallo recurrido se colige que los jueces del fondo en ningún momento negaron el carácter de instrumento privado a las cartolas bancarias y cheques, debiendo considerarse, además, que el propósito final de las argumentaciones que vierte el recurrente a ese respecto para expresar el error de derecho que atribuye a la sentencia recurrida, consiste en promover que se lleve a cabo por esta Corte una nueva valoración de las probanzas, distinta de la ya efectuada por los jueces del mérito, actividad que resulta extraña a los fines de la casación en el fondo.

Quinto: Que en lo que hace a la infracción al artículo 154 de la Ley General de Bancos, al no haber admitido la declaración de los testigos del demandado, al haber acogido una tacha fundada en la calidad de empleados del banco. Cabe puntualizar que dicho precepto no tiene el carácter de norma de reguladora de la prueba, puesto que se refiere al secreto bancario y la reserva de ciertas operaciones bancarias. En todo caso, dicho capítulo de impugnación será igualmente desestimado, por cuanto se dirige en contra de aquella parte de la resolución por la cual se decidió sobre las tachas opuestas,

pronunciamientos que no constituye una declaración del fallo que, en esta parte, tenga el carácter de sentencia definitiva o interlocutoria que ponga término al juicio o haga imposible su continuación, motivo por el cual no puede ser revisada por la vía de la casación que se ha impetrado.

Sexto: Que, establecida la ausencia de infracción a las normas reguladoras de la prueba, corresponde consignar los hechos de relevancia jurídica establecidos por los jueces del grado:

a) en la escritura pública de 22 de diciembre de 1999, por la cual se redujo la trigésima cuarta reunión de directorio de Coexpan Chile S.A., consta en la cláusula denominada "Nuevos Poderes número I", que se le otorgó a don Roberto Eyzaguirre Barahona, las facultades descritas en la cláusula 7 y 8 .

En el número III de esa escritura consta que a don Gregorio Guzmán Cordero, se le confirió poder para que actuando conjuntamente con uno cualquiera de los señores Roberto Eyzaguirre Barahona o Enrique Videla Vicuña o Luis de Mussy Marchant, representan a la sociedad con las facultades establecidas en los números 7 y 8 del número I de la escritura en comento.

b) la operación bancaria realizada por el señor Gregorio Guzmán Cordero el 22 de febrero de 2001, consistió en una orden al banco demandado para la compra de US\$ 300.000 para luego solicitar que dicha cantidad de dinero fuera depositada en una cuenta corriente del banco Citibank Nueva York, cuenta que pertenecía a Roberto Eyzaguirre Barahona.

c) en la operación descrita precedentemente actuó solamente el mencionado Gregorio Guzmán Cordero. d) no se acreditó como un hecho el que la actuación unipersonal de Gregorio Guzmán Cordero era un modo habitual de operar entre las partes, respecto de comparar en moneda extranjera para depositar en cuentas de terceros.

Séptimo: Que los hechos consignados precedentemente, llevaron a los jueces del grado a concluir que la operación que sirve de fundamento a la presente acción, no se realizó de acuerdo a lo convenido en la escritura pública de 22 de diciembre de 1999, específicamente en la cláusula denominada "Nuevos Poderes número I", números siete y ocho en relación con el número III de la escritura pública de 22 de diciembre de 1999, por lo que el banco incurrió en una conducta descuidada o negligente en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, lo que generó un perjuicio a la demandante.

Los sentenciadores señalan, en lo referido a alegación del banco demandado, en cuanto a que la actuación del señor Guzmán Cordero se ajustó al modo habitual de operar entre las partes, que no se acreditó dicha circunstancia y que " aún cuando lo hubiere hecho, no puede invocarla como causal modificatoria de su responsabilidad contractual, desde que el titular de la cuenta corriente es una persona jurídica que tiene una forma de representación distinta y en la cual participan distintas personas en su representación, cada una con facultades que le son propias y restringidas a lo que efectivamente se les ha conferido, siendo de advertir que los poderes para actuar conjuntamente ante el banco demandado, fueron conferidos por escritura pública y el hecho que precisamente en las anteriores operaciones hubiere actuado uno sólo de ellos, no implica sino que también en ellas hubo al menos un descuido que no puede obligar al demandante, por no encontrarse conferidos los poderes para actuar en su representación de esa forma".

Octavo: Que, en el primer capítulo del recurso se estima vulnerado el artículo 1489 del Código Civil, el que deberá ser rechazado según el siguiente análisis. En efecto, habiendo quedado establecido como hecho de esta causa que el banco demandado cargó en la cuenta corriente que la Sociedad Comercial e Industrial denominada Coexpan mantenía en ese banco, la suma de \$ 170.618.991, para luego adquirir la cantidad de US \$ 300.000, al cursar una solicitud hecha por quien carecía de poder suficiente para efectuarla, es indudable que incurrió en incumplimiento de una obligación negativa, esto es de no hacer, puesto que estaba impedido contractualmente de hacerlo sin la concurrencia de uno cualquiera

de los señores Enrique Vicuña Videla, Luis de Mussy Marchant y Roberto Eyzaguirre Barahona, de todo lo cual viene a resultar que los fundamentos de las infracciones de ley del capítulo en estudio, quedan desprovistos de toda sustentación fáctica y jurídica, puesto que de acuerdo con lo que establece en artículo 1555 inciso primero del Código Civil el incumplimiento de la obligación de no hacer se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, si no pudiere deshacerse lo hecho, y es precisamente lo que ha demandado en estos autos derechamente la sociedad demandante, ejercitándola como acción substitutiva y compensatoria que resulta ser en este caso, hasta el punto que el acreedor, como lo manda el inciso final del precepto anteriormente citado, debe quedar indemne, es decir, libre de daño.

Noveno: Que es útil señalar que respecto de la claridad e inteligencia de la norma contenida en el artículo 1555 inciso primero del Código Civil, que acertadamente aplicaron los jueces del fondo, no se advierten discrepancias en la doctrina. Los autores Alessandri, Somarriva y Vodanovic, en el Tratado de las Obligaciones expresan que la obligación de no hacer se infringe en los casos que se hace lo que no debió hacerse y que "su ejecución forzada sólo procede cuando no puede destruirse lo hecho en caso contrario la contravención hace responsable al deudor de la indemnización de perjuicios" (página 247 N° 806). Fuego Laneri, en esa misma dirección manifiesta que la infracción de la obligación de no hacer, cuando no puede deshacerse lo hecho, se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, lo que significa que en vez de la obligación que no se cumplió nace otra, la de indemnizar (Tratado sobre Cumplimiento de las Obligaciones, página 243). René Abeliuk se manifiesta en similar sentido en su Tratado de las Obligaciones (página 666).

Décimo: Que, a continuación, es menester consignar que la determinación de la voluntad e intención de los contratantes, esto es la interpretación de un contrato -en general- constituye un hecho de la causa, dado que los jueces del fondo lo establecen como fruto de la valoración de las probanzas rendidas, y por ende, en cuanto a tal, no es susceptible de alterarse por la vía del recurso de casación en el fondo y, por el contrario debe mantenerse inamovible cuando no hay una vulneración de las normas reguladoras de la interpretación de los contratos, debiendo considerarse además que mientras no se afecte con ello el verdadero sentido y alcance de las mismas, no es un asunto susceptible de ser revisado por esta vía.

Undécimo: Que, atendido lo precedentemente señalado, no pueden prosperar el tercer y cuarto capítulo del recurso de casación en el fondo por cuanto, a través de sus argumentos se pretende que esta Corte sancione jurídicamente un hecho que no ha sido establecido por los sentenciadores. En efecto, la recurrente afirma, que de haber interpretado la relación jurídica de las partes desde el prisma de la aplicación práctica, siguiendo las reglas sobre interpretación de los contratos, se habría rechazado la demanda, toda vez que dicha aplicación práctica resulta concluyente para determinar que el banco demandado se condujo en todo momento de buena fe en la que la sociedad demandante jamás advirtió o hizo saber a su parte las actuaciones dolosas de su gerente, ni impugnó las operaciones realizadas por el señor Guzmán.

De esta forma, resulta de toda evidencia que los planteamientos de este capítulo del recurso están condicionados a que se acepte su manera de entender e interpretar las estipulaciones contractuales, lo que importa exigir de este tribunal de casación un nuevo análisis sobre la forma de ejecutar el contrato y la prueba rendida sobre el particular para establecer que la ejecución práctica del mismo, vino a sustituir las cláusulas sobre poderes establecidas en la escritura pública de veintidós de diciembre de 1999, con lo cual, las órdenes, solicitudes y operaciones realizadas por Gregorio Guzmán Cordero, sin la concurrencia de la firma de cualquiera de las otras personas autorizadas para ello, correspondía a la aplicación práctica que las partes dieron al contrato, lo cual, como se indicó en el considerando precedente, es ajeno al control de esta Corte por lo que estos capítulos del recurso no puede prosperar.

Duodécimo: Que, de este modo, al determinarse por los jueces del fondo los supuestos fácticos que han sido reproducidos en el considerando sexto, especialmente, haberse establecido que la operación bancaria realizada por el señor Gregorio Guzmán Cordero el 22 de febrero de 2001, por la cual sin la

conurrencia de algún otro personero del banco autorizado al efecto, ordenó al banco demandado la compra de US\$ 300.000, para luego solicitar que dicha cantidad de dinero fuera depositada en una cuenta corriente del Banco Citibank Nueva York, cuenta que pertenecía a Roberto Eyzaguirre Baraona y el hecho de no haberse acreditado la alegación de que la actuación unipersonal de Gregorio Guzmán Cordero; en este específico acto jurídico de traspaso de fondos era un modo habitual de operar entre las partes, se puede advertir que los restantes argumentos del recurso de casación en el fondo contrarían los hechos tal como fueron establecidos por los sentenciadores, lo que impone su rechazo.

Décimo tercero: Que finalmente respecto de la infracción de los artículos 4 y 5 del D.F.L. N° 707, preceptos que en concepto de esta Corte resultan inaplicables en la especie, toda vez que nos encontramos frente a una acción que pretende se declare la obligación de la demandada de indemnizar perjuicios, como consecuencia de un incumplimiento de una obligación contractual, materias que se encuentran regladas por el derecho común estatuido en las disposiciones pertinentes contenidas en el Código Civil, siendo por ello improcedente la aplicación de normativa especial establecida por el legislador con fines distintos a los referidos y que dicen relación con la corrección meramente contable de los saldos de cuentas corrientes bancarias. En efecto, los artículos 4 y 5 del texto en vigor de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, se refieren a los saldos de tales cuentas que provienen de los estados periódicos que los bancos envían a los titulares de las mismas, comúnmente denominados "cartolas", las cuales, entre otros movimientos, indican el número de cada cheque girado y su monto, que es cargado o debitado en la cuenta corriente al ser pagado por el Banco. El cuentacorrentista puede verificar, entonces, con el talonario de cheques correspondiente, si el respectivo cheque fue o no cargado en la cuenta corriente por el monto con que fue girado. Si ello está conforme, la cartola, en cuanto únicamente informa tal hecho, no podría merecer objeción. Asunto muy diferente es que el Banco, al extraer dinero de la cuenta corriente de la sociedad demandante para comprar dólares y remesarlos a una cuenta en el extranjero, haya actuado o no conforme a los poderes otorgados por el cuentacorrentista y debidamente registrados en el Banco para dar cumplimiento a la respectiva orden de compra, que es lo que ha ocurrido en la especie.

Decimocuarto: Que en razón de cuanto se ha consignado y razonado precedentemente y no apareciendo que la sentencia recurrida hubiere incurrido en las infracciones denunciadas, debe rechazarse el recurso de casación en el fondo en estudio.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 440, por los abogados Claudio Díaz Uribe y Rodrigo Zegers Reyes, en representación de la demandada, en contra de la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil siete, escrita a fojas 433. Acordada con el voto en contra del ministro señor Muñoz Gajardo, quien estuvo por acoger el recurso de casación en el fondo, anular la sentencia de segundo grado y dictar fallo de reemplazo, separadamente a continuación, pero sin previa vista de la causa, por la que se revoca la decisión de primera instancia, en cuanto acoge la demanda de indemnización de perjuicios, resolviendo, en su lugar, que se la rechaza, por las siguientes argumentaciones:

Voto en contra en disidencia, acoge la demanda

1°.- Que en la especie, la existencia de una relación contractual válida, que liga a las partes en este proceso, ha resultado ser un punto pacífico, desde que nadie ha controvertido que con fecha 21 de agosto de 1984 se celebró un contrato de cuenta corriente bancaria, suscrito por don Gregorio Guzmán en representación de Coexpán S.A. Tampoco se ha discutido que mediante instrumento de 22 de diciembre de 1999, se redujo a escritura pública el "Acta Trigésima Cuarta Reunión del Directorio Coexpan Chile S.A.", por la cual se confirió poder a don Gregorio Guzmán Cordero, para que actuando conjuntamente con uno cualquiera de los señores Roberto Eyzaguirre Barahona o Enrique Videla Vicuña o Luis de Mussy Marchant, representen a la sociedad con las facultades establecidas en los n

1°.- Que en la especie, la existencia de una relación contractual válida, que liga a las partes en este proceso, ha resultado ser un punto pacífico, desde que nadie ha controvertido que con fecha 21 de agosto de 1984 se celebró un contrato de cuenta corriente bancaria, suscrito por don Gregorio Guzmán en representación de Coexpán S.A. Tampoco se ha discutido que mediante instrumento de 22 de diciembre de 1999, se redujo a escritura pública el "Acta Trigésima Cuarta Reunión del Directorio Coexpán Chile S.A.", por la cual se confirió poder a don Gregorio Guzmán Cordero, para que actuando conjuntamente con uno cualquiera de los señores Roberto Eyzaguirre Barahona o Enrique Videla Vicuña o Luis de Mussy Marchant, representen a la sociedad con las facultades establecidas en los números 7 y 8 del número I de la escritura en comento.

La discusión surge a partir de la aplicación práctica que según el demandando, las partes dieron al contrato, conforme al cual durante dieciocho años el señor Guzmán y el señor Eyzaguirre, ejecutivos de la demandante, llevaron las relaciones comerciales con el banco, procediendo a girar el primero de los nombrados números cheques de manera individual, sin que la sociedad demandante impugnara dichas actuaciones.

2°.- Que en la interpretación de los actos, contratos o convenciones los jueces deben ceñirse a las disposiciones que establece el legislador, atribuyéndoles y deduciendo los efectos y alcances que sobre la base de tales reglas de interpretación es posible otorgarles.

De un somero análisis de los artículos 19, 1069 y 1560 del Código Civil, la doctrina ha expresado que el legislador adhirió al sistema subjetivo de interpretación. Sin embargo, de una lectura comparativa de las dos últimas disposiciones mencionadas con las del Código Civil Francés, se observa que don Andrés Bello complementó la significación de la forma verbal en participio "manifestada", agregando el adverbio "claramente", por lo que se recurrirá a la intención del testador o de las partes en la convención o contrato cuando ella se desprende y distingue perfectamente.

De lo contrario, no resulta procedente construir intenciones o voluntades presuntas o virtuales, sino que se debe recurrir a otros criterios de interpretación o mejor dicho de determinación de la voluntad, con un carácter más objetivo, sin que se pueda concluir que simplemente exigió como presupuesto básico de esta actividad la oscuridad del acto o convención, pues es sabido que esta sola precisión lleva envuelta una interpretación.

De esta manera, la invocación a la intención de las partes no resulta suficiente para legitimar una tal precisión de sentido ya que, como se ha dicho reiteradamente por esta Corte de Casación, la distorsión de las disposiciones contractuales ocurre cuando los sentenciadores, en el ejercicio de la función que les es propia, alteran las consecuencias de cláusulas respecto de las que no existe controversia en la forma en que se pactaron, desnaturalizándolas y, en tales circunstancias, "el poder soberano de los jueces del pleito para establecer los hechos de la causa, no puede extenderse a su apreciación jurídica y a la determinación de la ley que les sea aplicable; y por consiguiente la ilegal apreciación de las cláusulas del contrato y las erróneas consecuencias que de esta ilegal apreciación deduzcan los jueces del pleito deben ser sometidas a la censura de la Corte Suprema por medio del recurso de casación por violación del artículo 1545, o sea por violación de la ley del contrato" (Luis Claro Solar, Derecho Civil Chileno y Comparado, pág.474).

En este sentido debe distinguirse entre lo que es la existencia del contrato y de sus estipulaciones propiamente tales, que constituye una cuestión de prueba, diferente de la precisión del sentido y alcance de los actos y contratos, que es un aspecto de interpretación, que no deben ser confundidos. En un paso siguiente del análisis se encuentra la calificación que pueda hacerse de la convención, circunstancia, esta última, que excede la simple interpretación, que como se ha dicho, está referida a determinar su sentido y alcance, si n que deba considerarse para ello los efectos que tendrá.

La precisión de los elementos de relevancia jurídica es lo que permitirá efectuar la subsunción de los supuestos de hecho en la norma, está constituida por el producto de la interpretación de los hechos, actos, contratos o convenciones, por lo que excede dicha actividad, al precisar los antecedentes o bases aisladas que tienen relevancia en el derecho, pero para un correcto análisis deben ser considerados en su conjunto, no de manera aislada.

En la calificación jurídica nos encontramos con la actividad tendiente a aplicar "el derecho a los hechos, con el fin de determinar su naturaleza jurídica, o sea, la denominación atribuida por la ley a una situación de hecho determinada, especialmente en lo referente a los actos y contratos, en los cuales ella ha dado reglas que deben ser observadas, toda vez que no hayan sido derogadas por acuerdo de las partes, en cuyo silencio entra a suplirlas" (José Florencio Infante Díaz, Causales de Casación de Fondo en Materia Civil, páginas 98 y 99).

Para Capitánt es "la determinación previa de la naturaleza jurídica de una relación de derecho, con el fin de clasificarla en una de las categorías jurídicas existentes".

Sea una actividad previa o esté comprendida en la misma la precisión de la naturaleza jurídica, la calificación jurídica indudablemente lleva a ella. La determinación legal de los hechos, está constituida por la actividad que encierra el establecimiento de todas aquellas circunstancias, condiciones, caracteres, requisitos o elementos que debe reunir un hecho, acto o contrato, encaminados a la producción que un efecto determinado.

La determinación pues, de las disposiciones legales aplicables al caso es una labor que resulta como consecuencia de las actividades anteriores, en que se verá la normativa llamada a ser aplicada al litigio, de la que se presume su mayor conocedor es el juez.

Los efectos jurídicos que de tales normas derivan para el caso concreto, son las consecuencias en los derechos de las partes que genera la aplicación de las disposiciones legales, los que serán decididos y declarados por el tribunal como la culminación de la actividad jurisdiccional.

3°.- Que indudablemente queda dentro de la competencia de la Corte de Casación la revisión de la calificación jurídica de los hechos, la determinación del carácter legal de los mismos, como de las disposiciones legales aplicables y los efectos que de tales normas derivan para el caso concreto, por cuanto "lo que le corresponde ver a la Corte de Casación es si establecido un hecho cualquiera" éste "reúne los caracteres o requisitos fijados por la ley para que produzca un efecto determinado, y ver si las consecuencias jurídicas que los jueces sentenciadores han sacado de los hechos constatados soberanamente, están ajustadas a derecho, o por el contrario si se han negado a admitir las consecuencias que de ellos se deducen" (J. F. Infante D., obra citada, página 100).

En este mismo sentido se expresa Luis Claro Solar al señalar que "todo lo que toca a la calificación legal de los hechos y todo lo que se refiere a las consecuencias de esta calificación legal, bajo el punto de vista de la aplicación de la ley, entra forzosamente en el dominio de la Corte de Casación, porque corresponde al terreno del Derecho" (Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo XI, N° 1032, página 474).

4°.- Que la labor interpretativa de los actos y contratos tiene por objeto conocer la intención común de los contratantes, la voluntad que han expresado al celebrarlo, aquello en lo que han consentido, lo cual les unió y determinó que contrataran, aspecto que, conforme al artículo 1560 del Código Civil, debe conocerse "claramente" para estarse a ella más que al texto del acuerdo.

Para llevar adelante esta labor y que no se extravíe el intérprete, el legislador ha entregado diversas reglas que sirven en la consecución de su actividad. Es el legislador el que indica al intérprete cómo

debe actuar para fijar la voluntad de quienes convinieron. El Código Civil fundamentalmente se refiere a estas reglas en los artículos 1560 a 1566, las que ciertamente no tienen un orden de prelación, sino que su importancia se deriva de la incidencia que tienen en determinar en mayor o menor medida la intención de las partes, pero considerando todas las circunstancias que rodearon la celebración del contrato y no únicamente su texto, e n todo lo que ha sido el iter contractual, el marco global de las relaciones que unen a las partes e incluso lo relativo a la etapa de cumplimiento.

El primer aspecto a considerar es la determinación de lo pactado, esto es su texto, circunstancia que ya ha sido precisada con anterioridad y en torno a la que no existe controversia. En segundo lugar corresponde realizar la labor interpretativa del convenio, para lo cual se considerará especialmente la utilidad de las cláusulas del contrato, debiendo preferirse el sentido en que pueden producir algún efecto, como también tener presente el riesgo de redacción del texto de la convención. En esta labor, se ha dicho, que el sistema subjetivo de interpretación de los contratos se atenuó al agregarse en el referido artículo 1560 del Código Civil el adverbio "claramente", por lo que se recurrirá a la intención de las partes en la convención o contrato cuando ella se desprenda y distinga perfectamente, no resultando procedente construir intenciones o voluntades presuntas o virtuales, sino que se debe recurrir a otros criterios de interpretación o mejor dicho de determinación de la voluntad, con un carácter más objetivo.

5º.- Que en la determinación de lo que ha sido la voluntad de las partes al acordar una convención, es preciso considerar las orientaciones que entrega el legislador, especialmente en los artículos 1560 a 1566 del Código Civil. De tales normas se puede observar su intención de distinguir entre las que se extraen del contrato mismo, de aquellas que se desprenden de las circunstancias de la especie o que reflejan un comportamiento de las partes, conforme a lo que estimaron fue el acto o contrato celebrado.

La doctrina ha tenido la oportunidad de estudiar este punto precisando que "la existencia de una convención (cuestión de prueba) y el alcance de una convención (cuestión de interpretación) son dos aspectos diferentes, que no deben confundirse". (Jorge López Santa María, "Sistemas De Interpretación De Los Contratos", Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1971, página 66). Así, la interpretación resulta necesaria cuando los términos de una convención suscitan controversia entre las partes respecto de los distintos efectos que han de tener sus estipulaciones. En esta labor se han clasificado las reglas legales entre aquellas referidas al contrato propiamente tal y las que reflejan un comportamiento o acceden al contrato mismo.

De esta forma se puede señalar, siguiendo al profesor López Santa María, que existen reglas de interpretación intrínsecas al contrato, que en nuestro país están constituidas por: a).- Armonía de las cláusulas (artículo 1564 del Código Civil); b).- Utilidad de las cláusulas (artículo 1562); y c).- Términos ambiguos (artículo 1563 inciso primero). También surgen las reglas extrínsecas: a).- Aplicación restringida de la declaración (artículo 1561); b).- Extensión natural de la declaración (artículo 1565); c).- Por otros contratos (artículo 1564 inciso segundo), y d).- Interpretación auténtica (artículo 1564 inciso tercero). Por último se encuentran las reglas supletorias de interpretación, debiendo mencionarse: a).- Presunción de cláusulas de uso común (artículo 1563 inciso final); b).- Favor del deudor (artículo 1566 inciso primero); y c).- Riesgo de reducción (artículo 1566 inciso primero). Enunciado lo que es el principio del respeto al proceder individual y que obrar contra acto propio no vale, la interpretación auténtica se presenta como una de las de mayor importancia. Subrayando su capital importancia los autores chilenos, Claro Solar, por ejemplo, estiman que en un eventual orden de prelación, ella debería figurar inmediatamente a continuación del artículo 1560. "La interpretación auténtica es la reina de todas las interpretaciones y no hay que creer a aquellos tratadistas que rechazan esa especie de interpretación en materia contractual. Tal error nace de la mala aplicación de un principio muy verdadero, el cual dice que después de concluido el contrato, ninguna de las partes tiene libertad para modificar a su capricho la voluntad ya declarada e interpretarlo a su guisa. Pero este principio no es, ciertamente, acatado, si las dos partes se ponen de acuerdo para interpretar su

voluntad". En la hermenéutica de los contratos, la inteligencia, el sentido que le dan los contratantes es el faro más seguro para conocer la voluntad". Interpretando auténticamente, la Corte Suprema ha dicho: "La regla del inciso 3 del artículo 1564 es de importancia principalmente en la interpretación de los contratos que contienen obligaciones de dar o hacer, ya que nada puede indicar con más acierto la voluntad de las partes en esta materia que la ejecución llevada a cabo por ellos mismos de las cosas que, con arreglo a lo pactado, estaban obligadas a dar o hacer". (Jorge López Santa María, op. cit. página 96).

6º.- Que en la especie la demandada acompañó abundante documentación (copias de las cartolas informativas del "estado de cuenta corriente" entre el 3 de enero de 2000 y el 29 de diciembre de 2000 y entre el 02 de enero de 2001 y el 28 de diciembre del mismo año; fotocopias por ambos lados de los cheques girados por Guillermo Guzmán Molina en representación de Coexpan Chile S.A ., sin la concurrencia de otro socio, entre el 2 de noviembre de 1999 y el 28 de diciembre de 2001), documentos que indubitadamente llevan a concluir que hubo una ratificación tácita y confirmación del actuar del mencionado señor Guzmán, por parte del actor, desde que nunca objetaron las actuaciones de dicho personero.

7º.- Que en virtud de lo razonado este disidente estima que los jueces del fondo, al resolver como lo hicieron, infringieron los artículos 1545 y 1564 del Código Civil, pues se prescindió de considerar la aplicación que las partes dieron al contrato durante años, incurriéndose de este modo en infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción de la ministra señora Margarita Herreros y del voto en contra su autor. Rol N° 7104-07.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sres. Milton Juica A., Sergio Muñoz G., Sra. Margarita Herreros M. y Sres. Juan Araya E. y Guillermo Silva G.